

ECUADOR Debate₁₁₈

Quito/Ecuador/Abril 2023

Salud pública y mental



Una promesa sin porvenir. Elecciones locales y sistema de partidos en el Ecuador, febrero de 2023

Conflictividad socio-política
noviembre 2022 / febrero 2023

La salud pública en Ecuador: una visión crítica desde el paradigma de la antropología médica

Salud y movilización social: la desnutrición crónica infantil en Ecuador desde los casos kichwa de Chimborazo y waorani del Yasuní

Melancolización del lazo social en los Andes

Sobre la escucha de testimonios: lectura desde la Psicología Clínica de la función de documentador

La agricultura familiar campesina y su sostenibilidad

Parroquia Cacha, organizarse para (sobre)vivir

ECUADOR **Debate**

CONSEJO EDITORIAL

Alberto Acosta, José Laso Rivadeneira, Simón Espinoza, Fredy Rivera Vélez,
Marco Romero, Hernán Ibarra, Rafael Guerrero, Eduardo Gudynas

Directores: Francisco Rhon Dávila (1992-2022)
José Sánchez Parga (1982-1991)

Coordinadora/Editora: Lama Al Ibrahim

Asistente General: Gabriel Giannone

Ecuador Debate, es una revista especializada en ciencias sociales, fundada en 1982, que se publica de manera cuatrimestral por el Centro Andino de Acción Popular. Los artículos publicados son revisados y aprobados por la Dirección y los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de *Ecuador Debate*. Se autoriza la reproducción total o parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente: © **ECUADOR DEBATE. CAAP.**

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 51

ECUADOR: US\$. 21

EJEMPLAR SUELTO EXTERIOR: US\$. 17

EJEMPLAR SUELTO ECUADOR: US\$. 7

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Tel: 2522763 - 2523262

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net - www.caapecuador.org

Redacción: Diego Martín de Utreras N28-43 y Selva Alegre, Quito

PORTADA

Gisela Calderón/Magenta

DIAGRAMACIÓN

David Paredes

IMPRESIÓN

El Chasqui Ediciones

ISSN: 2528-7761



ECUADOR DEBATE 118

Quito, Ecuador • Abril 2023
ISSN 2528-7761

PRESENTACIÓN. 3-8

COYUNTURA

Una promesa sin porvenir. Elecciones locales y sistema
de partidos en el Ecuador, febrero de 2023 9-24

Pablo Ospina Peralta

Conflictividad socio-política 25-35

Noviembre 2022 - Febrero 2023

David Anchaluisa

TEMA CENTRAL

La salud pública en Ecuador: una visión crítica desde
el paradigma de la antropología médica. 37-52

Patricio Trujillo Montalvo

Salud y movilización social: la desnutrición crónica
infantil en Ecuador desde los casos kichwa
de Chimborazo y waorani del Yasuní 53-73

María Fernanda Rivadeneira, Ana Lucía Torres, Andrea Bravo y José David Córdor

Melancolización del lazo social en los Andes 75-93

Marie-Astrid Dupret

Sobre la escucha de testimonios: lectura desde la Psicología
Clínica de la función de documentador 95-115

María Verónica Egas-Reyes, Dennis Logroño-Sarmiento e Isaac David Grijalva-Alvear

DEBATE AGRARIO

La agricultura familiar campesina y su sostenibilidad 117-141
Ramón L. Espinel

ANÁLISIS

Parroquia Cacha, organizarse para (sobre)vivir 143-161
Fabián Regalado Villarroel

RESEÑAS

Interpretar el mundo. Ensayos sobre la crisis
de las sociedades contemporáneas 163-170
Manuel Núñez-García

Antonio Gramsci aproximaciones y (re)lecturas
desde América Latina 171-175
Santiago Ortiz Crespo

La evangelización del pueblo shuar
en la Amazonía ecuatoriana 177-179
Juan Fernando Regalado

Conflictividad socio-política

Noviembre 2022 - Febrero 2023

David Anchaluisa

En el actual periodo, la conflictividad socio-política se mantuvo dentro de una tendencia media-baja, la misma que principalmente estuvo circunscrita a las instancias estatales. Las respuestas por parte del Estado en su conjunto siguen siendo débiles y no han dado solución a las problemáticas económicas, políticas y sociales que demandan varios sectores del país. Los temas de seguridad ciudadana, el desempleo y el no cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre Gobierno y movimientos sociales, así como de financiamiento para mejorar la atención y servicio en el sector público, alimentan la inconformidad social, repercutiendo en la legitimidad y el apoyo con el que cuenta el gobierno del presidente Guillermo Lasso.

Frecuencia del conflicto

Durante este cuatrimestre, la conflictividad socio-política registra un número de casos similar al periodo julio-octubre 2022. Noviembre fue el mes que registró la mayor frecuencia de conflictos, con un total de 64 casos que, en términos porcentuales, representan el 35.16%. En el mes de diciembre, hubo una disminución considerable, sin embargo, en enero de 2023 nuevamente se registra un aumento significativo, llegando a 49 casos, que representan un 26.92%.

FECHA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Noviembre / 2022	64	35,16
Diciembre / 2022	29	15,93
Enero / 2023	49	26,92
Febrero / 2023	40	21,98
TOTAL	182	100

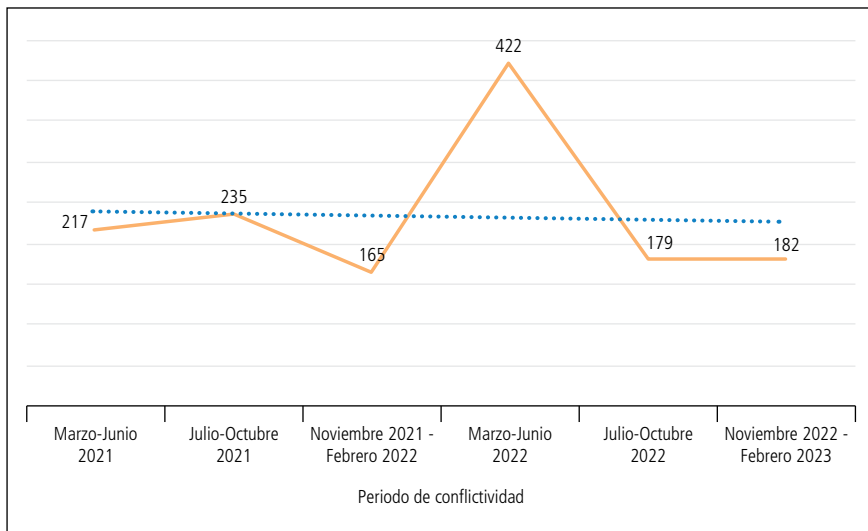
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

Los 182 casos registrados en este periodo, se encuentran dentro de la tendencia media-baja que se ha podido observar en la línea del tiempo anterior al Paro

Nacional de junio 2022. Por lo tanto, la frecuencia de los conflictos presentes a lo largo del gobierno de Guillermo Lasso, se mantienen en la misma tendencia.

Figura 1
Evolución de la frecuencia de la conflictividad socio-política



Fuente: Observatorio de conflictividad CAAP (2021-2023).

Género del conflicto

Al igual que en el periodo anterior, en el presente cuatrimestre el género de conflicto predominante se ubica en el ámbito de las *Organizaciones de la Sociedad Civil* con 39 casos, que representan el 21.43%. Los temas más importantes sobre los cuales las organizaciones exigieron atención fueron: control de las cárceles, protección de derechos humanos y acceso a servicios de salud.

Es importante evidenciar que los conflictos laborales, tanto *públicos* como *privados*, se incrementaron considerablemente en este periodo y alcanzaron 56 casos, que representan el 30.77%. De manera puntual se debe señalar que, en este periodo los conflictos laborales privados tuvieron mayor preponderancia que los públicos. Las demandas del sector del transporte (precio de combustibles, tarifas para usuarios), sectores productivos (bananeros, camaroneros), salarios impagos, entre otros, son los que con mayor frecuencia se han registrado en este periodo.

GÉNERO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Campesino	17	9,34
Indígena	20	10,99
Cívico regional	5	2,75
Urbano barrial	8	4,40
Laboral público	20	10,99
Laboral privado	36	19,78
Político partidista	4	2,20
Político legislativo	12	6,59
Pugna de poderes	3	1,65
Organizaciones de la Sociedad Civil	39	21,43
Instituciones educativas	5	2,75
Otros	13	7,14
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

En tercer lugar, los conflictos *indígenas* y *campesinos* suman 37 casos, representando el 20.33%. Ambos sectores se han mantenido muy activos en la política nacional a partir del Paro Nacional de junio de 2022. Los conflictos relacionados a lo *indígena* registran un aumento, pasando de 17 a 20, relacionados principalmente con la falta de acuerdos concretos en las mesas de diálogo que se habían planteado entre las organizaciones indígenas y el Gobierno Nacional. Cabe señalar, que la conflictividad relacionada a este sector también se registra en la Amazonía, atribuida al avance del extractivismo (industria petrolera y minería), se han registrado paralizaciones en las operaciones petroleras, como medidas de acción directa. Por otro lado, el sector *campesino* suma sus preocupaciones asociadas con las precarias condiciones para la producción agrícola y su financiamiento.

Finalmente, los conflictos *político partidistas* y *legislativos*, alcanzan el 8.79%, relacionados a la pugna por el control de la Asamblea Nacional y al fraccionamiento entre las bancadas que la componen. El poder legislativo jugó un rol importante como intermediador en las movilizaciones de junio de 2022, sin embargo, actualmente no goza de legitimidad ni de aprobación frente a la opinión pública. En este periodo, el planteamiento de juicios políticos a exministros de

Estado, e incluso contra el Presidente de la República, ocupó gran parte de la agenda legislativa, relegando varias de las reformas pendientes de carácter urgente dada la situación que atraviesa el país.

Sujeto del conflicto

Durante este cuatrimestre los *gremios* ocupan una importante frecuencia en la conflictividad, representando un 15.93%. En segundo lugar, los *grupos heterogéneos*, suman 26 casos de conflicto que representan el 14.29%, sus motivos son diversos: seguridad, acceso a justicia, defensa de derechos, demanda de obras de infraestructura. Finalmente, tanto los *grupos locales* como los *indígenas*, que figuran como sujetos movilizadores, junto con los *campesinos*, representan un total de 33.51%, mostrando así, una tendencia a lo largo de los últimos periodos como sujetos que encabezan varias formas de acción y que se mantienen en la palestra pública como actores políticos relevantes.

SUJETO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Gremios	29	15,93
Empresas	2	1,10
Sindicatos	11	6,04
Organizaciones barriales	2	1,10
Estudiantes	1	0,55
Trabajadores	10	5,49
Campesinos	18	9,89
Indígenas	20	10,99
Grupos locales	23	12,64
Grupos heterogéneos	26	14,29
Cámaras de la producción	5	2,75
Partidos políticos	17	9,34
Instituciones educativas	3	1,66
Otros	15	8,24
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

Objeto del conflicto

Dentro de todo el conjunto de casos de conflictividad de este periodo, diversos sectores fundamentan sus reivindicaciones en el *rechazo a la política estatal*, llegando así a duplicarse la frecuencia pasando de 20 a 40 en el actual cuatrimestre, lo que representa el 21.98%.

Por otro lado, las demandas de *financiamiento* evidencian un descenso de casos respecto al periodo anterior. En 18 casos, que representan el 9.89% del total, distintos actores -como Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), grupos de ciudadanos y gremios de transportistas y médicos- plantearon la necesidad de recursos para la provisión de servicios como salud, educación y construcción de obra pública.

OBJETO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Salariales	7	3,85
Laborales	17	9,34
Financiamiento	18	9,89
Rechazo política estatal	40	21,98
Denuncias de corrupción	1	0,55
Otros	99	54,40
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

Intensidad del conflicto

Dentro del repertorio de acción, las *marchas* como expresión y toma del espacio público fueron las de mayor frecuencia en este periodo, representando el 22.53% del total. A diferencia del periodo anterior, la categoría *amenazas* experimentó un incremento considerable pasando de 24 a 37. Esto tiene que ver con las constantes advertencias de los actores de la sociedad civil de pasar a acciones de mayor intensidad, en caso de que el Gobierno no atienda sus demandas, principalmente, en el marco de los procesos de diálogo entre organizaciones indígenas y el Ejecutivo.

INTENSIDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Bloqueos	21	11,54
Paros/huelgas	1	0,55
Tomas	1	0,55
Protestas	20	10,99
Marchas	41	22,53
Amenazas	37	20,33
Suspensión	2	1,10
Juicios	15	8,24
Otros	44	24,18
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

Otras formas de acción menos frecuentes en este periodo fueron: *bloqueos* que representan el 11.54%; *protestas* 10.99% y finalmente *juicios* con un 8.24%.

Impacto del conflicto

El impacto de los conflictos socio-políticos durante este periodo en las categorías: *nacional, regional y provincial*, llegan al 67% del total. Cifra cercana a la del cuatrimestre anterior, en el que las tres categorías señaladas representaron el 72.7% de casos; en este periodo se mantiene la tendencia de que los conflictos tengan repercusiones que superan el ámbito local.

IMPACTO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Local	37	20,3
Cantonal	23	12,6
Provincial	37	20,3
Regional	65	35,7
Nacional	20	11,0
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

En el ámbito *nacional y regional*, los conflictos de mayor relevancia se han relacionado con los juicios políticos planteados para distintas exautoridades del Estado, el rechazo a la orientación del Gobierno por parte de organizaciones campesinas e indígenas, que son críticas con el resultado de los diálogos. Frente a este proceso, las organizaciones sociales, principalmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN) y Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE), han experimentado desacuerdos entre ellas, así como al interior de sus estructuras, lo que genera varias interrogantes sobre la confluencia de las acciones que podrían plantearse en conjunto.

Conflictos por región

Históricamente la distribución de conflictos por región marca una tendencia en la que la *Sierra* concentra la mayor frecuencia. En este periodo se registran 114 casos que representan el 62.6%.

REGIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Costa	59	32,5
Sierra	114	62,6
Amazonía	9	4,9
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

Por su parte, la *Costa* concentra un total de 59 casos, que representan un 32.5% y la *Amazonía*, 9 casos, que representan el 4.9%. La frecuencia por región es muy similar a la evidenciada el cuatrimestre anterior.

En el cruce de las variables *Género y Región* se observa que en la Sierra prevalecen los conflictos relacionados con las *Organizaciones de la Sociedad Civil, laboral privado, político e indígena*, motivado este último, por el avance en la implementación de actividades extractivistas y a los infructuosos diálogos entre movimientos sociales y Gobierno nacional. En la Amazonía casi la totalidad de los conflictos se relacionan con Petroecuador EP, que durante este periodo tuvo que paralizar su producción por varios días.

Por su parte, en la Costa el género del conflicto que prevalece es el *laboral privado, organizaciones de la sociedad civil y campesino*.

GÉNERO Y REGIÓN DEL CONFLICTO			
	Costa	Sierra	Amazonía
Campesino	12	5	0
Indígena	0	13	7
Cívico regional	2	2	1
Urbano barrial	3	5	0
Laboral público	8	12	0
Laboral privado	16	19	1
Político partidista	1	3	0
Político legislativo	0	12	0
Pugna de poderes	0	3	0
Organizaciones de la Sociedad Civil	12	27	0
Instituciones educativas	1	4	0
Otros	4	9	0
Total	59	114	9

Fuente: Observatorio de conflictividad CAAP (nov.2022-feb.2023)

Elaboración: UI-CAAP.

Conflicto por provincia

Un análisis de la distribución de conflictos por provincia permite ver claramente tres núcleos que acogen casi la totalidad de casos. Pichincha, 86 casos que representan el 47.3%; Guayas, 39, que representan el 21.4%; y Azuay, 15 que representan el 8.2%. En el caso de la primera, se concentran los conflictos relacionados con las disputas entre partidos políticos y aquellos que se procesan dentro de la Asamblea Nacional, tales como los juicios políticos; asimismo, gran parte de los conflictos relacionados con la justicia y los laborales, públicos y privados. Por su parte, en Guayas la seguridad es un tema álgido, las constantes marchas por la paz, que exigen una política clara para enfrentar la ola de violencia por la que atraviesa la región, fueron una forma de acción frecuente con la que la ciudadanía manifestó su descontento. Finalmente, en Azuay los temas que han provocado una

mayor cantidad de conflicto fueron: minería, seguridad ciudadana y demanda de recursos al Estado central.

PROVINCIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Azuay	15	8.2
Bolívar	1	0.5
Carchi	4	2.2
Cotopaxi	2	1.1
El Oro	3	1.6
Esmeraldas	3	1.6
Guayas	39	21.4
Imbabura	1	0.5
Loja	2	1.1
Los Ríos	3	1.6
Manabí	5	2.7
Morona Santiago	1	0.5
Pastaza	1	0.5
Pichincha	86	47.3
Tungurahua	4	2.2
Zamora Chinchipe	1	0.5
Orellana	7	3.8
Santo Domingo de los Tsáchilas	4	2.2
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

Intervención estatal

Las instancias que mayormente han procesado la conflictividad social-política durante este cuatrimestre fueron tres: *ministerios*, el *poder judicial* y la *Asamblea Nacional*. Lo anterior da cuenta de que el repertorio de acciones de los actores sociales se canalizó hacia la institucionalidad.

INTERVENCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Policía	6	3.30
Ministerios	80	43.96
Presidente	3	1.65
Municipio	8	4.40
Gobierno provincial	7	3.85
Judicial	21	11.54
Consejo Nacional Electoral	4	2.20
SENECYT	2	1.10
Asamblea Nacional	17	9.34
Consejo Provincial	3	1.65
Corte Constitucional	1	0.55
Otros	30	16.48
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.

Elaboración: UI-CAAP.

Desenlace del conflicto

Si bien en este periodo se ha evidenciado una institucionalización del conflicto, es preocupante observar que las dos categorías predominantes en el desenlace son: *aplazamiento de resolución*, que alcanza un 52.7% y *no resolución*, que representa un 30.8%. Esta situación agota las posibilidades de gestión del conflicto dentro de los marcos democráticos. Además, es necesario tener en cuenta que, en su mayoría, los conflictos que no hallaron solución o que la misma se aplazó corresponden a asuntos de suma importancia, como cumplimiento de acuerdos en el marco de los diálogos, seguridad ciudadana, financiamiento para la provisión de servicios básicos.

DESENLACE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Negociación	16	8.8
Positivo	9	4.9
Rechazo	4	2.2
Represión	1	0.5
No resolución	56	30.8
Aplazamiento resolución	96	52.7
Total	182	100

Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

Así, el conjunto de problemas estructurales que aquejan a la sociedad ecuatoriana permanece irresueltos y alimenta, por un lado, el inconformismo social en torno a temas como empleo, seguridad, provisión de servicios públicos, y, por otro lado, el descenso de aceptación del Gobierno y su gestión. En el contexto actual, Guillermo Lasso ha sufrido una importante pérdida de respaldo y legitimidad; evidencia de ello es, por una parte, la derrota en el referéndum que desde el Gobierno se la planteó como una herramienta necesaria para el combate al crimen organizado transnacional y para mejorar la eficiencia de la institucionalidad y, por otra parte, las altas probabilidades de ser enjuiciado políticamente con la intención de destituirlo.